

Derechos de acceso a la justicia en asuntos ambientales

1. Presentación

Las Asambleas Nacionales de Derechos Humanos constituyen un espacio de diálogo entre la INDDHH, organismos del Estado, organizaciones sociales y otros actores relevantes, orientado a fortalecer las políticas públicas desde una perspectiva de derechos humanos.

En este marco, el Consejo Directivo de la INDDHH se propuso abordar el eje **Protección del ambiente**, con foco en el **acceso a la justicia en asuntos ambientales**, reconociendo su creciente relevancia en la agenda pública nacional e internacional.

2. El ambiente en Uruguay: una realidad que interpela

El derecho a un ambiente limpio, saludable y sostenible es fundamental para el ejercicio de todos los derechos humanos y el derecho a la vida. En Uruguay, este tema ha cobrado una preocupación creciente, vinculándose con la salud, la alimentación y el modelo productivo.

El Estado tiene obligaciones específicas de respetar y proteger este derecho, garantizando el acceso a la información, la participación pública y mecanismos judiciales efectivos para reparar daños.

En Uruguay, el tema ha adquirido centralidad en el debate público, en tanto se vincula con la salud, la alimentación, el acceso al agua y el modelo de desarrollo productivo. Asimismo, la complejidad de los problemas ambientales exige fortalecer los mecanismos de acceso a la información, la participación pública y la justicia ambiental.

La protección del ambiente es una responsabilidad transversal que involucra al Estado y a las organizaciones civiles. La Asamblea 2026 busca retomar el trabajo del grupo iniciado en años anteriores para construir propuestas que aseguren una justicia ambiental efectiva y el cumplimiento de las recomendaciones pendientes

3.El acuerdo de Escazú como marco

El Acuerdo Regional sobre el Acceso a la Información, la Participación Pública y el Acceso a la Justicia en Asuntos Ambientales en América Latina y el Caribe (Acuerdo de Escazú), profundiza el Principio 10 de la Declaración de Río sobre el Medio Ambiente y

el Desarrollo. Fue aprobado en Uruguay por ley 19.773 del 17 de julio de 2019, y entró en vigor en la región el 22 de abril de 2021.

Este Acuerdo dispone en cuanto al derecho de acceso a la justicia:

- Abarca instancias judiciales y administrativas.
- Se establece la legitimación activa amplia en defensa del ambiente, es decir, facilitando que cualquier persona pueda presentar reclamos (no necesariamente por sufrir directamente los daños, sino también por motivos de interés general y considerando derechos colectivos).
- El Estado debe facilitar la producción de la prueba del daño ambiental.
- El Estado debe garantizar el acceso a mecanismos de reparación.
- Incluye mecanismos alternativos de solución de controversias ambientales, que no pasan exclusivamente por la vía judicial, como la mediación, conciliación, diálogo.

4.Grupo de Trabajo:

A partir de la Asamblea Nacional de Derechos Humanos de 2018 se generó un Grupo de Trabajo vinculado a estos derechos de acceso, coordinado por la INDDHH y con participación de organizaciones sociales, organismos públicos y academia. Se presentó un informe colectivo en 2020, que recoge fortalezas, debilidades y recomendaciones al Estado sobre el tema, que en muchos aspectos puede continuar manteniendo vigencia.

Marco Legal: Uruguay aprobó el Acuerdo de Escazú por Ley 19.773, el cual establece la legitimación activa amplia y la obligación del Estado de facilitar la prueba del daño ambiental.

Del informe de ese grupo de trabajo¹ surgen las siguientes recomendaciones al Estado

1. Generar discusión acerca de la estructura institucional necesaria para la mejor justicia ambiental en el ámbito del Poder Judicial y la Fiscalía General de la Nación (como la creación de unidades especializadas, etc.).
2. Fortalecer la formación académica y técnica en asuntos ambientales de los diferentes miembros de la Administración Pública (nacional, departamental, municipal y paraestatal).
3. Fortalecer mecanismos de formación permanente y sistemática en temas ambientales de los/as operadores/as jurídicos (Poder Judicial y Fiscalía), así como espacios de formación interdisciplinarios.

¹ <https://www.gub.uy/institucion-nacional-derechos-humanos-uruguay/comunicacion/publicaciones/derechos-acceso-informacion-participacion-publica-justicia-asuntos>

4. Mejorar la base de jurisprudencia del Poder Judicial, para visualizar el acceso a la Justicia en asuntos ambientales en el derecho nacional.
5. Revisar los tiempos de investigación en casos de denuncias por daño ambiental para garantizar el debido proceso y una respuesta rápida y efectiva.
6. Garantizar que todos los organismos públicos, cuenten con mecanismos de reserva de identidad en la realización de denuncias ambientales.
7. Revisar la normativa y/o procedimientos para garantizar la efectiva reparación y recomposición del ambiente en base al art. 4 de la Ley de Evaluación de Impacto Ambiental.
8. Promover la discusión y creación de la figura de delitos ambientales por medio de la modificación del Código Penal (Delitos contra el Ambiente), apoyando los procesos de discusión que se han dado a nivel país.
9. Generar acuerdos entre los ministerios y gobiernos departamentales que permitan generar procedimientos unificados, intercambio de informes técnicos, historial de sanciones y empresas o sujetos incumplidores.
10. Fortalecer la asistencia jurídica gratuita en asuntos ambientales a través de la defensorías públicas, para la población vulnerable.
11. Difundir los mecanismos de consultas y denuncias administrativos en los distintos organismos competentes.

5. Preguntas para el intercambio en la Asamblea

- ¿Qué nuevas recomendaciones deberían incorporarse para mejorar el acceso a la justicia ambiental?
- ¿Cuáles son las prioridades para avanzar en el corto y mediano plazo?
- ¿Qué acciones concretas pueden desarrollar las organizaciones y la INDDHH para fortalecer estos derechos?